



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación"

Registro nro.: 20/18

LEX nro.:

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por la jueza Angela E. Ledesma como presidente y los jueces Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa como vocales, asistidos por la Secretaria de Cámara Mariana Andrea Tellechea Suárez, a los efectos de resolver el recurso interpuesto en la presente causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3 del registro de esta Sala, caratulada: "López, José Francisco s/recurso de casación"; encontrándose representado el Ministerio Público Fiscal por el doctor Javier Augusto De Luca y la defensa de Marcos Artemio Marconi a cargo del doctor Mariano Fragueiro Frias, la defensa de José Francisco López a cargo de los doctores Diego Martín Sánchez y Fernando Gabriel García, la defensa de Andrés Enrique Galera a cargo de los doctores Hugo Gabriel Palmeiro y Maximiliano Adolfo Rusconi, la defensa de María Amalia Díaz, a cargo de los doctores Juan Lucas Landucci y Juan Carlos Luis D'Ascenzo, la defensa de Eduardo Ramón Gutiérrez a cargo de la doctora María Valeria Del Bono Lonardi y el doctor Oscar Mario Salvi y la defensa de Carlos Hugo José Gianni a cargo del doctor Mariano Fragueiro Frias; por último la Unidad de Información Financiera (UIF) por el doctor Mariano Federici.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultaron designados para hacerlo en primer término el juez Alejandro W. Slokar y en segundo y tercer

Fecha de firma: 09/02/2018

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA

lugar las jueces doctora Ana María Figueroa y la doctora Angela E. Ledesma, respectivamente.

El señor juez **Alejandro W. Slokar** dijo:

-I-

1º) Que por resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, en la causa n° 12441/2008/16/CA8 de su registro, se dispuso: **"CONFIRMAR** el punto dispositivo VII del decreto que en fotocopias se encuentra agregado a fs. 8/15 de este incidente" (fs.45).

Contra dicho pronunciamiento, la UIF interpuso recurso de casación (fs. 47/68), el que fue declarado inadmisibile (fs. 71), lo que motivó la presentación del recurso de queja. Finalmente esta Sala concedió el recurso de casación (fs.32) que fue mantenido (fs. 35).

2º) Que la asistencia técnica encuadró su remedio en ambos incisos del art. 456 del digesto de rito.

Así, como primer punto de agravio, planteó que en la tramitación del sumario hubo una errónea delimitación del sustrato fáctico y el objeto procesal. En este punto, el recurrente explicó que en su primigenia presentación en la causa introdujo una hipótesis que abarcaba tanto el delito de enriquecimiento ilícito como el de lavado de activos.

Así señaló que: "...en relación a las conductas típicas de lavado de activos cabe señalar que el Organismo no aportó hechos nuevos, que no formaran parte del plexo probatorio de la causa, sino que los puntualizó y destacó su trascendencia jurídica" (fs.52). Además advirtió que: "...las conductas tendientes a la legitimación de activos provenientes del enriquecimiento ilícito del funcionario público investigado conforman el objeto procesal de la causa más allá de que sobre las mismas no se hayan formulado intimaciones o pueda



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación"

profundizarse su conocimiento con diversas medidas de prueba" (fs.52vta.).

Desde ese punto de vista, articuló un extremo de censura en torno a la calificación legal atribuida a los hechos, en tanto consideró debería contemplarse el delito de lavado de activos. En apoyo de esta afirmación mencionó extremos fácticos que -a su entender- justifican la aplicación de ese tipo penal.

Así mencionó que: "El primero, respecto de la vivienda donde habitaba LÓPEZ, es dable pensar que se hayan realizado acciones de `conversión` respecto de bienes primigeniamente ingresados a su patrimonio a través de la defraudación al Estado, en las ostensibles mejoras que la propiedad detentaba. Si esto ocurrió, sin dudas implicó la afectación al bien jurídico protegido por el art. 303 del C.P." (fs.66vta.).

Luego refirió que: "El segundo es en relación al tristemente célebre episodio de los bolsos, donde fueron halladas millonarias sumas de dinero en distintas monedas. A criterio de esta Unidad, este episodio debería imputársele al encartado como un acto de disimulación de fondos de origen ilícito. ¿O acaso el intento de hacer pasar estas millonarias sumas por `donaciones`, todo en un procedimiento de cinematográfica clandestinidad, no es un claro ejemplo de disimulación?".

En otro orden de ideas, explicó las competencias específicas de la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de la Oficina Anticorrupción (OA), sobre lo cual adujo que: "...no existe comunión de intereses entre los organismos públicos involucrados, ya que cada uno tiene

competencias específicas asignadas para diferentes cometidos estatales, en los términos del artículo 3 de la ley n° 19.549, y no es posible que uno ejerza las funciones del otro, en la medida en que no hay norma que les atribuya competencias específicas concurrentes sobre idénticos asuntos con igual alcance" (fs.54).

Por otro lado, el recurrente alegó que la postura sostenida por el *a quo* en su resolución ya fue superada por la doctrina de esta Cámara, sentada en distintos precedentes donde se le otorgó la facultad de querellar a la UIF.

Asimismo, respecto de la afirmación del *a quo* sobre que el querellante debe tener un legítimo interés adujo que: "...el delito precedente forma parte del elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos (art. 303 CP), toda vez que aquel tipo exige que los bienes que se pretenda dar apariencia de licitud provengan de un ilícito penal. De tal manera, si bien la doctrina y la jurisprudencia no exigen una condena previa por el delito precedente, resulta de interés legítimo de la UIF arribar a la mayor precisión posible respecto de este delito..." (fs.63vta.).

Ad finem, el casacionista postuló que en la decisión de la Cámara de Apelaciones no se atendieron todos los extremos de agravio introducidos en el recurso de apelación. En concreto, manifestó que el *a quo* no se refirió sobre la hipótesis delictiva planteada por la UIF.

3º) Que en la oportunidad contemplada en el art. 466 del CPPN, el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia propició el rechazo del recurso interpuesto (fs. 61). En particular señaló que debía atenderse el objeto procesal del sumario y que, a todo evento, la persecución del delito de lavado de activos podía perseguirse en otro proceso, amén de los problemas en torno al *ne bis in ídem* que ello podría generar.



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación"

Luego el Fiscal General De Luca refirió que: "Este es el problema dogmático de la relación entre el mal llamado delito de enriquecimiento ilícito y el lavado de activos en la modalidad de autolavado, en tanto que la legitimación de la UIF no está prevista para ser querellante en los casos en que se investiga la presunta comisión del primero de esos ilícitos (Decreto PEN 2.226/2008 reglamentario de la ley 25.246 según redacción de la norma 26.683) y por cuanto la competencia de los funcionarios públicos se rige por el principio de legalidad (art. 19 C.N.) y no puede extenderse más allá de los casos establecidos en la ley..." (fs.61vta.).

Por su parte, la defensa de Andrés Galera presentó un escrito (fs.71/73) y también solicitó el rechazo del recurso. Señaló que no hay normativa que apoye el pedido de la UIF para ser tenido como parte querellante en este proceso y compartió el criterio establecido por el acusador público en cuanto no se investiga en la causa una hipótesis de lavado de activos.

Además advirtió que: "...en la actualidad se encuentra constituida, dentro de las normas que la habilitan, la Oficina Anticorrupción como querellante en autos, representando así, junto con el Ministerio Público Fiscal los intereses del Estado Nacional..." (fs.72).

A su vez la Defensora Oficial de Lucila Corvalán de Díaz y de Celia Inés Aparicio se presentó en término de oficina (fs.76/77) y reiteró los argumentos incoados en las presentaciones antes mencionadas, en tanto agregó que en la especie se cumplió con el doble conforme.

4º) Que a fs. 121/127 la defensa presentó breves notas, donde reiteró los puntos de agravio. Luego, a fs. 128 se dejó constancia de haberse superado la etapa prevista en el

art. 468 del CPPN, por lo que las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

-II-

Que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible. Está dirigido por el pretense querellante contra la decisión que le denegó ese rol (art. 457 CPPN), satisface las exigencias de interposición (art. 463 del CPPN), de admisibilidad (art. 444) y se han invocado agravios fundados en la inobservancia de la ley procesal y sustantiva (art. 456, incs. 1º y 2º del rito).

-III-

Que por auto interlocutorio corriente a fs. 45, la Sala II de la Cámara porteña confirmó la decisión del juez de grado de fs. 10/15, que denegó la posibilidad de constituirse en parte querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la presente causa.

En ese auto, el *a quo* sostuvo que: "...esta Sala se ha enrolado en una concepción amplia conforme a la cual el bien jurídico tutelado no resulta una pauta definitoria para evaluar la legitimación activa, pero exige que en todos los casos la afectación por el daño que el delito pudo irrogarle sea directa..." (fs.45).

En base a esa postura concluyó que: "En el caso, no se observa -aún a la luz de la interpretación amplia referida- la afectación de modo especial y directo que se le exige a quien procura intervenir como parte querellante en el proceso", pues consideró que: "...si bien la Unidad de Información Financiera es la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos proveniente de la comisión de diversos ilícitos [...] los hechos objeto de esta encuesta resultan ajenos a dicha previsión normativa, en tanto -más allá de la interpretación que efectúa la



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso
de casación"

recurrente- la presente se relaciona y circunscribe al eventual enriquecimiento ilícito de José Francisco López" (fs.45/vta.).

A su vez, esta resolución puesta en crisis aparece en sintonía con la del juez de primera instancia, quien había denegado la facultad de querellar a la UIF bajo el argumento de que el objeto procesal de las actuaciones no permitía que ese organismo fuera parte en la causa, de acuerdo a sus facultades establecidas en la normativa vigente.

Así, el juez de primera instancia indicó que: "A lo largo de la pesquisa, el Ministerio Público Fiscal merced sendos requerimientos de instrucción estructuró la hipótesis delictiva como aquella prevista en el tipo penal reglado en el art. 268 (2) del Código Penal, es decir enriquecimiento ilícito en la persona del ex Secretario de Obras Públicas de la Nación José Francisco López" (fs.13).

De manera que, de acuerdo con la hipótesis de la acusación, se dictó el procesamiento con prisión preventiva de José Francisco López, María Amalia Díaz, Andrés Enrique Galera y Eduardo R. Gutiérrez por el delito de enriquecimiento ilícito.

En base a esa consideración, el magistrado actuante apreció que: "...conforme la propia normativa que ciñe la actividad de la UIF, el rol de querellante no puede ser aceptado en una causa cuya objeto procesal no es el lavado de activos sino el enriquecimiento ilícito de un funcionario, pues no posee el plus de legítimo interés que se le exige para ser querellante".

En otro aspecto, en ese auto se aseveró que la Oficina Anticorrupción querrela en dicho proceso y por ende la pretensión punitiva del estado se encontraría cubierta.

Por otra parte allí se invocó que: "...dicho organismo se presentó ante el Juzgado Federal de la ciudad de Mercedes con el objeto de entablar una querrela respecto de José Francisco López por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, dicha solicitud no prosperó toda vez que dicho Tribunal resolvió archivar dichas actuaciones, conforme se desprende de las copias remitidas por el mencionado Tribunal a fs. 10836/52" (fs.13).

En suma, el argumento central para denegarle a la UIF la posibilidad de querellar en las presentes actuaciones se ciñó al objeto procesal del sumario que -hasta el momento- se vinculó al delito de enriquecimiento ilícito.

Ahora bien; cabe referir que en orden a la capacidad del recurrente para ejercer ese rol en un proceso, me he pronunciado favorablemente al votar en la causa n° 305/2013, caratulada: "García Moritan, Roberto s/recurso de casación" (rta: 5/09/2014, reg: 1722/14).

Allí puntualmente se advirtió que: "... la ley n° 17.516 regla la facultad de ser querellante del estado nacional ya que, como persona jurídica, tiene la capacidad de estar en juicio y constituirse como tal. Esto es así, a partir de lo dispuesto en el artículo 1° de la mencionada norma, en cuanto establece que: `Salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado Nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdicciones y administrativos, nacionales o locales: a) en Capital Federal, por los letrados dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos Ministerios, Secretarías de Estado, reparticiones o entes descentralizados...´. En esa misma línea,





Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso
de casación"

en su artículo 4° dispone que: "El Estado podrá asumir el carácter de parte o querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público, y particularmente cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional...".

Luego se refirió que: "La ley n° 25.246 -modificada por ley n° 26.683- en su art. 6° establece que la Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir, por un lado, el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal). Así, se enuncian una serie de tipos penales de los que 'preferentemente' podrían provenir esos activos, entre los que se encuentran los delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal, entre otros. Por otro lado la ley prevé capacidad para actuar en el delito de financiación del terrorismo (artículo 213 *quáter* del Código Penal)".

Pues bien; se estableció que esa reglamentación debía complementarse, habida cuenta que: "...la capacidad para querellar fue otorgada expresamente por el decreto P.E.N. n° 2226/08 que reza: 'Autorízase a la titular de la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias, **en aquellos casos que así lo ameriten**' (el resaltado no es del original)".

Así las cosas, se concluyó que: "...el decreto que reglamenta la potestad para querellar contempló cierta

amplitud en cuanto a los casos en que la UIF podrá reclamar dicho rol".

En el precedente de marras esta Sala autorizó a la UIF a querellar en un proceso donde el supuesto fáctico objeto de la investigación se circunscribía al delito de enriquecimiento ilícito. Para establecer esa postura menester resultó analizar la vinculación entre la causa donde se investigaba aquél delito con otra donde se perseguía la figura de lavado de activos que, en su redacción anterior, remitía al delito de encubrimiento.

En ese contexto, en la sentencia citada, se explicó que: "La ley n° 25.246 introdujo la figura de lavado de activos financieros provenientes de delitos que, sin perjuicio de los debates doctrinarios sobre el bien jurídico afectado, tiene como requisito la existencia de un delito anterior, cometido en el país o en el extranjero. El delito previo puede ser cualquiera que reporte al autor, esto es, dinero o bienes que por su monto y características sea necesario introducir al sistema financiero, de manera de ocultar su origen ilícito y así eludir cualquier investigación patrimonial" (*Vid.* causa n° 305/2013, con sus citas).

Así también se afirmó que: "...no obstante su autonomía, que el encubrimiento tiene una relación directa con el delito previo, tanto que no puede imaginarse una conducta encubridora sin que exista en realidad un delito principal que resulte encubierto...", tanto como que: "Al referirse al delito de receptación, Martos Núñez subraya que se trata de una figura jurídico-penal plenamente autónoma e independiente del delito principal. Ello es así, añade, porque el delito que comete el receptor es distinto de aquel que ha realizado el autor del delito principal, ya que entre la receptación y el delito precedente no existe una conexión interna, sino sólo



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación"

una relación externa..." (Vid. causa n° 305/2013, con sus citas).

En definitiva esas observaciones llevaron a establecer que: "...este vínculo externo entre los ilícitos en trato -lavado de dinero y enriquecimiento ilícito- permite justificar el legítimo interés de la Unidad de Información Financiera para querellar en la presente, pues el conocimiento específico en la materia y las herramientas de investigación a su alcance podrían contribuir a la obtención de la verdad real, en particular respecto de delitos que afectan al sistema financiero y económico que, como en la especie, presuntamente incluye formas comisivas que comprometen a la administración pública, donde no deben limitarse recursos que podrían mejorar y facilitar la pesquisa. De tal suerte, el mero acceso que podría tener la UIF a la causa donde se investiga el enriquecimiento ilícito no sería suficiente, pues se le debe brindar la potestad procesal que permite instituir la como parte (art. 82 CPPN), de forma tal que pueda promover el avance de dicho proceso y así también, aunque en forma indirecta, contribuir al desarrollo de la investigación propia del delito de lavado de activos".

En estas condiciones la vinculación entre el delito de enriquecimiento ilícito que se viene investigando como delito precedente del lavado de activos justifica la pretensión del organismo estatal para querellar en el *sub judice* toda vez que -como se advirtió en el precedente citado- la capacitación técnica específica de la UIF redundaría en un aporte orientado a los fines para los que se encuentra instituida.

Así también, en cuanto a las objeciones sobre las múltiples representaciones del estado en la presente causa, a raíz de la intervención de la Oficina Anticorrupción como querellante, merece destacarse que comparativamente se trata de organismos que persiguen distintos intereses.

Por lo demás debe tenerse en cuenta que conforme la ley n° 25.233 -artículo 13- se creó la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la ley n° 25.246 -artículo 5°- establece que la Unidad de Información Financiera funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas Públicas y guarda por propósito el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos (art. 303 CP), preferentemente proveniente de la comisión de los delitos enunciados en el artículo 6° de la ley mencionada.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Gostanian" (Fallos: 329:1984) se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación quien señaló que: "Más allá de las ideas generales expuestas por la recurrente sobre la división de poderes y el rol de los distintos departamentos del Estado, lo cierto es que no logra demostrar en concreto por qué la intervención de la Oficina Anticorrupción impide la defensa del imputado, de qué manera se restringen las garantías y derechos que le acuerdan las leyes, o, incluso, de qué modo atenta contra el debido proceso la intervención de un querellante -aunque sea una persona del derecho público- junto a un fiscal, cuando el procedimiento penal regula esa coexistencia acusadora. ¿Cuál sería, entonces, la diferencia perjudicial entre un querellante privado y el Estado cumpliendo ese rol? ¿Qué haya una doble intervención el Estado? Pero, justamente, con base en el principio de la separación de los poderes, no hay ningún

Fecha de firma: 09/02/2018

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA

12

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



#29665059#198148474#20180207124411567



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación"

riesgo de que se confundan el ente ejecutivo y aquél que tiene la titularidad, la potestad exclusiva -y aun la facultad dispositiva- de la acción penal pública...".

En estas condiciones, y en las particulares circunstancias de la especie, no se acredita suficientemente ningún menoscabo a las garantías constitucionales.

En mérito de lo expuesto, se propone al acuerdo hacer lugar al recurso de casación, anular la resolución recurrida sin costas y encomendar que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme los lineamientos aquí sentados (art. 471, 530 y cc del CPPN).

Así lo voto.-

La señora jueza doctora Ana María Figueroa dijo:

Que por compartir en lo sustancial el voto del distinguido colega que lidera el Acuerdo, habré de adherir a la conclusión a la que arriba.

En primer término considero que el recurso de casación interpuesto por el pretense querellante contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de fecha 27 de diciembre de 2016 que confirmó lo decidido por el juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, en cuanto no hizo lugar a la petición formulada por la Unidad de Información Financiera de ser parte querellante en estas actuaciones, resulta formalmente admisible.

Conforme se advierte de la presentación efectuada por el titular de la UIF, quien tiene a su cargo *"el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir"* los delitos detallados en el art. 6° de la ley 25.246, y de su confrontación con las constancias de la

Fecha de firma: 09/02/2018

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA

causa, entiendo que el recurrente ha demostrado tener un interés legítimo para intervenir en el proceso en calidad de querellante.

Ello es así pues podría existir vinculación entre la maniobra objeto de investigación en las presentes con alguna de las conductas previstas en la ley 25.246.

Por lo tanto, debe concluirse en que la legitimación activa que se deriva de la normativa invocada por el recurrente (art. 82 del CPPN, ley 25.246 –modificada por ley n° 26.683–, decreto n° 2226/08 y art. 4 de la ley 17.516) se halla expedita.

He de agregar que la decisión que aquí adopto observa los lineamientos establecidos por nuestro Alto Tribunal en el precedente “Santillán” en punto a que *“Si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma”,* (Fallos: 321:2021).

En virtud de lo expuesto propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto, anular la resolución recurrida y su antecedente necesario (pto. dispositivo VII del decisorio de fs. 8/15 de la presente incidencia) y en consecuencia remitir las actuaciones a la Cámara de grado a fin de que, tome nota de lo aquí resuelto y las reenvíe a su origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la doctrina aquí establecida, sin costas (arts. 471, 530, 531 y cdtes. del C.P.P.N.). Tal es mi voto.

La señora jueza **Angela Ester Ledesma** dijo:

Fecha de firma: 09/02/2018

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ALEJANDRO WALTER SLOKAR, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANA MARIA FIGUEROA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANGELA ESTER LEDESMA, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: M. ANDREA TELLECHEA SUAREZ, SECRETARIA DE CAMARA



Cámara Federal de Casación Penal

Sala II

Causa N° CFP 12441/2008/20/1/CFC3

"LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación"

Tal como viene sellada la suerte y analizadas las particulares circunstancias de la causa, coincido con la respuesta favorable que el doctor Slokar propone para el recurso de casación bajo examen.

Tal es mi voto.

En mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal **RESUELVE:**

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera UIF, **SIN COSTAS, ANULAR** la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de fs.45 y encomendar el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a los lineamientos aquí sentados (art. 471, 530 y ccds. CPPN).

Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sirviendo la presente de atenta nota de envío.